

El progresista AMLO, llevado por la necesidad, militariza México

Por **Fabián Calle**

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es un político poco convencional. Las elites políticas suelen verlo como antisistema, su relación con la prensa es muchas veces conflictiva, y en sus discursos abundan referencias al nacionalismo y a Dios. Como presidente de México, destaca en sus arengas la muy buena relación que mantiene con Donald Trump y la necesidad de un vínculo estrecho con los Estados Unidos de América. También, desde un primer momento relativizó el peligro de la pandemia del Covid-19 iniciada en China a fines del 2019, pese al explosivo aumento de contagiados y de fallecidos en su país, y centró su retórica en evitar el colapso económico y el aumento exponencial del desempleo y la pobreza. A diario afirma que una de sus cruzadas es la lucha contra la corrupción.

A pesar de representar la tradición de la izquierda latinoamericana, AMLO no participa de las reuniones del denominado Grupo Puebla, que reúne a dirigentes progresistas jubilados, donde el actual gobierno Argentino abreva política e ideológicamente. Contrariando todos los pronósticos, el presidente mexicano está implementando un profundo proceso de militarización de la sociedad, incorporando a las FF.AA en funciones de gobierno que son propias de los civiles, como veremos a continuación.

Sin duda el lector se habrá percatado al llegar a este punto de las similitudes entre AMLO y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro; aquel considerado un fiel custodio del progresismo, éste calificado como exponente de la derecha neoliberal.

Resulta llamativo que la izquierda vernácula no mida con la misma vara a estos dos líderes políticos supuestamente tan diferentes, pero tan parecidos. Las anteojeras ideológicas y el peso de lo políticamente correcto habilitan en estos grupos el uso del doble estándar.

AMLO y Bolsonaro comparten también la decisión de otorgarle numerosas responsabilidades a los militares, que exceden ampliamente su rol tradicional. Los militares mexicanos llevan ya casi dos décadas de pelea cuerpo a cuerpo con los poderosos carteles de las drogas que operan en el país. Son grupos dotados de recursos económicos infinitos, con complicidades políticas y poseedores de armamentos que no tienen nada que envidiarle a ISIS, FARC o Al Qaeda.

Entre las nuevas responsabilidades que el primer mandatario mexicano les asignó a los militares figura la participación en la construcción de dos tramos del Tren Maya, de 1.500 kilómetros, una de las principales obras de infraestructura de interconexión del país. Eso no es todo; la lista de responsabilidades cedidas es extensa. El pasado 29 de julio, *El Universal* de México publicó un detalle de las numerosas obras y misiones en

los que están empeñados los 62 mil miembros de las FF.AA.: el aeropuerto de Santa Lucía, el Banco del Bienestar, la remodelación de hospitales abandonados, la atención en la pandemia, el combate al huachicoleo, la vigilancia de las fronteras y el apoyo a la Guardia Nacional, la distribución de recursos de los programas sociales, los programas Jóvenes Construyendo el Futuro Sembrando Vida, el reparto de fertilizantes y los puertos y aduanas, entre las principales.

El control de los puertos y las aduanas por parte de los militares mexicanos es la más reciente de las decisiones de AMLO y para muchos la más impactante por su magnitud e implicancias económicas y políticas. La motivación que expuso el Presidente fue poner fin a la corrupción y a los altos niveles de complicidad con actividades criminales ligadas al narcotráfico y al contrabando.

Desde el final de las guerras civiles y la consolidación política del país en la década del 1930, los uniformados de ese país habían tenido siempre un rol limitado en la vida política nacional. Los recursos presupuestarios asignados a las fuerzas armadas nunca fueron abundantes y su relacionamiento con otros países y en especial con los EE.UU. eran limitados. El avance avasallador del narcotráfico en el territorio nacional comenzó a cambiar esta situación. La debilidad y corrupción policial obligó a las gestiones tanto del PRI como del PAN a darle a las FF.AA. un papel central en esa batalla. Poco influyeron las preferencias ideológicas de los gobernantes a la hora de tomar estas decisiones, sino el calibre y la potencia de las armas y explosivos de los narcotraficantes y su penetración en la vida civil y política.

A pesar de que AMLO durante su campaña y primeros meses de gobierno argumentaba que no proseguiría con la militarización del país, al poco tiempo cambió de opinión y como nunca antes entregó a los militares tareas que eran propias de los civiles, además de encomendarle la profundización de la lucha contra el narcotráfico.

Al tomar estas decisiones, AMLO no dudó en poner al descubierto el fracaso del aparato estatal en el cumplimiento de sus funciones tradicionales, una confesión dramática para un país que hizo del poder del Estado un culto.

Por último, esta situación lleva a reflexionar sobre el ensordecedor silencio de la progresía argentina e internacional sobre este AMLO verde oliva. Mientras que la izquierda vernácula y latinoamericana alerta todo el tiempo sobre el poder que Bolsonaro le asigna a los militares brasileños en la salud, la seguridad interior, la política exterior, etcétera, omite comentarios sobre la creciente militarización en México. De igual modo en Venezuela, un país de fachada democrática tutelado por los militares, que controlan las funciones de gobierno e incluso de la vida civil.

Un abordaje más realista y práctico, alejado de oportunismos e ideologías, debería promover la pregunta -y su respuesta- de cómo y porqué las debilidades institucionales de nuestros países han conducido a los gobiernos a delegar en el mundo castrense más espacios y funciones de la vida pública. Aquí mismo, los devastadores efectos económicos y sociales del Covid-19 obligaron al gobierno progresista de Alberto Fernández a entregarle a las FF.AA. la responsabilidad de repartir en el conurbano bonaerense más de 6 millones de raciones de comida, y el despliegue intensivo de sus medios de transporte, sanitarios y logísticos.

Estos cambios, si bien detonados por la necesidad, presentan una oportunidad para abrir un debate amplio que facilite la reconciliación de la sociedad y la dirigencia política argentinas con sus FF.AA.

Las consecuencias políticas de la crisis económica

por **Ignacio Labaqui**

El año 2020 será muy probablemente el peor año en la historia económica argentina. De acuerdo con la edición de junio pasado del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central los analistas económicos prevén en promedio una caída de 12,3 puntos del PBI. El FMI y la CEPAL son ligeramente más optimistas. El primero espera una contracción de 9,9% del nivel de actividad en tanto que la segunda pronostica una caída de 10,5%. A su vez, la inflación esperada para este año de acuerdo con la encuesta del Banco Central es de 39,3%, por debajo del valor de 2019. Sin embargo, los analistas esperan una aceleración en el ritmo de aumento de los precios al consumidor en lo que resta del año conforme se vayan levantando las medidas de aislamiento y distanciamiento social. Según el REM del Banco Central la inflación esperada para los próximos 12 meses es de 52,3%.

El descalabro económico vendrá acompañado por un marcado deterioro en los indicadores sociales. De acuerdo con las previsiones de la CEPAL la Argentina es el país de la región que experimentará el mayor aumento de la pobreza. En materia de empleo los datos reportados la semana pasada por el Ministerio de Trabajo de la Nación muestran que entre febrero y mayo hubo una caída de 200.000 empleos registrados en el sector privado.

Frente a semejante panorama surge una pregunta obvia, pero cuya respuesta no lo es tanto: ¿cuáles serán las consecuencias políticas de la crisis económica en curso? Semanas atrás la actriz devenida en conductora televisiva Juanita Viale preguntó al aire a sus invitados de manera cándida y espontánea -pero a la vez punzante: "Y termina el gobierno? ¿Termina el mandato?". Por entonces, el escenario político lucía bastante más convulsionado. El gobierno venía de dar un paso en falso con el fallido intento de estatizar a la empresa Vicentín y el presidente Alberto Fernández se encontraba bajo fuego amigo.

El recientemente anunciado acuerdo con los tenedores de deuda bajo legislación extranjera es en este sentido una bocanada de aire fresco para el gobierno, que probablemente contribuya a calmar las hasta hace poco agitadas aguas dentro del Frente de Todos. Pero tal como ha reconocido el mismo gobierno, el arreglo con los bonistas no resolverá todos los problemas que aquejan a la economía argentina.

Para algunos observadores la analogía con el 2001-2002 resulta obvia y en virtud de ello tal vez conviene detenerse en la incómoda pregunta de Juanita Viale. El colapso de la salida de la convertibilidad y sus coletazos, no solo resultaron en la caída del gobierno de la Alianza y en la efímera presidencia de Adolfo Rodríguez Saá, sino que también llevaron a que el presidente Eduardo Duhalde, designado por la Asamblea Legislativa para completar el mandato trunco de Fernando De la Rúa, anticipara las elecciones presidenciales y el traspaso del mando.

Los colapsos presidenciales no son una rareza argentina, sino que han sido un fenómeno frecuente en la región desde la última ola de democratización. En el pasado los

presidentes democráticos eran desalojados por sendos golpes militares. Este tipo de eventos son hoy más bien la excepción antes que la regla. Pero a pesar de ello, en los últimos 40 años más de 20 presidentes latinoamericanos no pudieron completar su mandato, ya sea porque adelantaron las elecciones o el traspaso del mando, porque renunciaron frente a la perspectiva de un *impeachment* exitoso, o porque fueron destituidos por el Poder Legislativo.

A pesar del sombrío escenario económico que transita la Argentina, la probabilidad de una crisis política como la de 2001 es baja. Las crisis económicas, independientemente de su magnitud, son condición necesaria pero no suficiente para los colapsos presidenciales. La evidencia muestra que los presidentes que no terminan el mandato son aquellos que se quedan solos. No cuentan ni con el apoyo de "la calle" ni tampoco del Legislativo. Las manifestaciones por sí solas no tumban presidentes. Jefes de Estado altamente impopulares como Michel Temer o Alejandro Toledo fueron capaces de completar su mandato. Sin embargo, los presidentes minoritarios que no cuentan con un escudo legislativo sí resultan vulnerables a las crisis económicas y a la presión de la calle.

Alberto Fernández cuenta con un nivel de aprobación elevado (50% de acuerdo con una reciente encuesta realizada por la Universidad de San Andrés) y su coalición controla 42 de las 72 bancas del Senado y 119 de los 257 escaños de la Cámara Baja. A pesar de la caída en la popularidad presidencial causada por diversos motivos tales como la fatiga hacia las medidas de aislamiento, decisiones como el fallido intento de expropiar Vicentín o la grave situación económica, Alberto Fernández cuenta aún con un elevado respaldo en la opinión pública y con espaldas sólidas en el Congreso. De ahí que la probabilidad de un nuevo 2001 sea baja siempre y cuando no haya un quiebre en la coalición oficialista.

¿Cuán factible es un quiebre del Frente de Todos? Poco probable también. Si bien en las últimas semanas hubo tensiones, nada indica que la coalición oficialista enfrente riesgos de ruptura. Podría decirse que invirtiendo la fórmula de Alem, el Frente de Todos se doblará, pero difícilmente se quebrará. En todo caso, si el kirchnerismo –el grupo mayoritario y con la figura de mayor volumen político de la coalición– se siente disconforme con la gestión presidencial, probablemente ello lleve a un cambio en el equipo de gobierno y a una mayor presencia kirchnerista en el gabinete, algo que repercutirá negativamente sobre la imagen presidencial. Paradójicamente, hay allí un círculo vicioso. Cada medida que Alberto Fernández toma para satisfacer las demandas del kirchnerismo –como el intento de estatizar Vicentín– o atender a las urgencias de la vicepresidenta –como la recientemente anunciada reforma judicial o los embates sobre Horacio Rodríguez Larreta– hacen caer la imagen de moderado que el presidente promovió durante la campaña presidencial dañándolo en las encuestas. Ello a su vez, lo hace más dependiente del núcleo duro del Frente de Todos, los votantes de Cristina Fernández de Kirchner.

Para resumir, puede haber tensiones, disensos y fuego amigo, pero la ruptura no es un escenario probable. Ni el presidente ni la vicepresidenta ganan nada con un quiebre de la coalición. Tampoco Sergio Massa, el otro socio minoritario en la coalición gobernante, tiene rédito alguno en una ruptura del Frente de Todos. Una ruptura de la coalición en este contexto económico dejaría al peronismo en una situación de debilidad de cara a las elecciones legislativas de 2021. En buena medida el resultado de las mismas no solo estará dado por la economía, sino por el grado de cohesión o fragmentación del oficialismo y de la principal fuerza de oposición. En términos políticos, es posible que la nueva normalidad presente un panorama signado por la administración de las disputas internas del Frente de Todos.

CALÍBAR el rastreador

Informe estratégico sobre Argentina

Comité de redacción:

Fabián Calle

Matteo Goretti

Francisco Santibañes

Luis Tonelli

Ignacio Labaqui

Juan Battaleme

CALÍBAR el rastreador es un informe estratégico sobre Argentina. La propuesta es brindar análisis e interpretaciones y ofrecer escenarios, que favorezcan tanto el debate como la toma de decisiones. No es un informe de prensa, no nos ceñimos a la lectura de los medios ni centramos nuestro interés en el día a día. Tampoco planteamos las ideas a través del eje amigo-enemigo del gobierno, de sectores o de grupos. Consideramos que una manera de contribuir al desarrollo del país es crear un espacio que ofrezca mayor profundidad en el análisis, con una mirada estratégica y un interés centrado en lo que podría pasar más que en lo que ya pasó.

Calíbar era un gaucho del interior admirado por Domingo F. Sarmiento, quien lo retrató en *Facundo*, libro escrito en 1845. Calíbar hacía de rastreador, es decir, seguía huellas y pisadas que quedaban impresas en el terreno, un oficio esencial en un país extenso y recorrido por llanuras. Sus ojos leían el suelo; su mirada profunda le permitía seguir rastros, incluso los que el tiempo había borrado. Lograba descifrar lo que estaba oculto. Convertía los indicios en evidencias. Interpretaba lo incomprensible. Poseía cualidades que cobran actualidad y relevancia en la Argentina de hoy.